

Santiago, dos de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

I.- En cuanto a la excepción de prescripción:

Primero: Que, en estos autos Rol IC N° 1217-2020, la demandada dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 31 de diciembre de 2019 por el Octavo Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda deducida, en los términos que indica, con costas.

Segundo: Que, previo a la vista de la causa, el recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, interpuso excepción de prescripción en contra de acción de autos, fundado en que habría transcurrido con creces el plazo de prescripción de 5 años regulado en el artículo 2515 del Código Civil, desde que las deudas por concepto de gastos comunes se hicieron exigibles, hasta la notificación de la demanda seguida en primera instancia ante el 8° Juzgado Civil de Santiago en causa Rol C-9776-2016.

Sostiene que, lo pretendido por el actor corresponde al pago de las expensas comunes generadas desde el año 2006 -fecha en la que adquirió el inmueble- hasta el mes de marzo de 2017; y, la demanda le fue notificada el 03 de agosto de 2017, por lo que las obligaciones hasta el mes de agosto de 2012 se encuentran prescritas.

Solicita a esta Corte que declare la prescripción de la acción de cobro de la deuda correspondiente desde el año 2006 hasta el mes de agosto de 2012, con costas.

Tercero: Que, el demandante y recurrido, evacuando el traslado conferido, solicita el rechazo de la excepción opuesta, con costas.

Argumenta que, con fecha 18 de junio de 2010, presentó una demanda ejecutiva por cobro de gastos comunes, contra la Sra. Paloma Larrondo, radicada en el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C- 9554-2010.

Afirma, que por el hecho de interponer la demanda ejecutiva y ser proveída, se produjo la interrupción civil, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2503 y 2518 del Código Civil, ya que no es necesaria su notificación, por lo que concluye que la acción ordinaria de cobro de pesos, no se encuentra prescrita.

Cuarto: Que, el artículo 2518 del Código Civil previene que “la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente” y que, en este último caso, “la prescripción se interrumpe civilmente por la demanda judicial”.



Por su parte, el artículo 2503 dispone que: *“Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor.*

Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes:

1º. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;

2º. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia;

3.º Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda.”

Quinto: Que, de las normas transcritas se desprende claramente que el plazo de prescripción se interrumpe sólo con la notificación válida de la demanda y no con su presentación.

En efecto, de lo contrario, bastaría interponer una demanda y no hacer nada más para entender que el plazo para alegar la prescripción se detuvo -per sé-, y nunca se podría extinguir la obligación, lo que claramente atenta contra el principio de certeza jurídica.

Sexto: Que, la Excma. Corte Suprema reiteradamente ha resuelto de la forma en que se viene razonando; así, en la sentencia de fecha 20 de abril de 2020, en los autos Rol N° 908-18, en lo pertinente señaló:

“TERCERO: Que, en primer lugar, se ha alegado la infracción a los artículos 19, 2492, 2503 y 2518 en cuanto la interrupción de la acción se produciría desde su presentación y no desde su notificación.

Al respecto debe indicarse, como lo ha hecho reiteradamente esta Corte, que a pesar de que el artículo 2518 del Código Civil disponga que la interrupción civil se produce por la demanda judicial, salvo que concurran los casos enumerados en el artículo 2503 del mismo cuerpo legal, la interpretación correcta de dichas normas es aquella que postula que es la notificación judicial de la demanda efectuada en forma legal la que provoca el efecto de impedir que se complete el plazo de que se trata.

Lo anterior, en cuanto pretender que es la sola presentación del libelo significaría, en primer lugar, que quedaría al arbitrio del demandante la determinación de la época en que la interrupción se consolidaría, lo que ocurriría sólo cuando decida que se lleve a cabo la notificación, efectuando el encargo al ministro de fe competente.



En segundo lugar, no se entendería la excepción del número 1 del artículo 2503 ya que, si no se produce la interrupción en el caso de notificación ilegal de la demanda, menos se entenderá que la interrumpe si no ha sido notificada de modo alguno y,

En tercer lugar, porque con dicha postura se estaría dotando a la referida actuación judicial de un efecto retroactivo que la legislación nacional no le otorga ni reconoce, pues, (...)”

“CUARTO: Que, no entenderlo de la manera como se postula, significaría que serían letra muerta las disposiciones que consagran la interrupción natural de la prescripción y las obligaciones naturales, como también la que autoriza al deudor a renunciar al derecho a alegar la prescripción extintiva, pues no obstante tener pleno conocimiento de la oportunidad en que empezó a correr el término legal necesario para que opere la prescripción como medio de extinguir las acciones y derechos ajenos, que no es sino a contar de la época en que la obligación se hizo exigible, desconocería la oportunidad en que el plazo se interrumpió civilmente, al entenderse que ello ocurre con la mera presentación de la demanda, por lo tanto, nunca podría interrumpirlo naturalmente, ni tener la certeza si está solucionando una obligación natural, menos renunciar al derecho a alegar en juicio el medio de extinguir a que se hace referencia. Tampoco deducir una demanda en juicio ordinario solicitando que se declare la prescripción extintiva, por haber transcurrido el término legal. (...)”

“SEXTO: Que, en definitiva, la interrupción del plazo de prescripción se produce con la notificación de la demanda. En ese sentido, coincide con una mayoría doctrinal que ha afirmado la necesidad de la notificación legal de la demanda. Así lo ha manifestado Ramón Domínguez Benavente ("Interrupción de la prescripción por interposición de demanda judicial", en Boletín de la facultad de derecho y ciencias sociales, Córdoba, 1969, pp. 77 86); Alfredo Barros Errázuriz (Curso de Derecho Civil, Santiago, 1942, p. 311) y Ramón Meza Barros (De la prescripción extintiva civil, Santiago, 1936, p. 42). El argumento esencial para sustentar esta posición es lo previsto en el artículo 2503 N° 1 del Código Civil, de manera que la ausencia de notificación legal de la demanda impide la interrupción, lo que conlleva erigir aquella en condición de ésta.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, en atención a las consideraciones que se han presentado, no sólo resulta necesario notificar en forma válida, sino que debe ocurrir antes que haya expirado el plazo de prescripción. Por consiguiente, el efecto interruptivo se produce con la notificación sin que a la presentación de la demanda pueda asignársele esa consecuencia.”



Séptimo: Que, consecuentemente, habiéndose notificado la demanda de autos el 03 de agosto de 2017, fecha desde la cual se interrumpió el cómputo de la prescripción, y tratándose en la especie de una acción ordinaria, la que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, prescribe en cinco años, corresponde que la excepción opuesta por la demandada en esta sede sea acogida, declarando la prescripción de las acciones para el cobro de todos aquellos gastos comunes exigibles con anterioridad a cinco años contados desde la notificación de la demanda.

II.- En cuanto al recurso de apelación:

Se reproduce la sentencia en alzada con la siguiente modificación:

En el considerando 5° se sustituye la frase “anterior a contar del mes de Mayo de 2009” por “correspondiente a contar del 3 de agosto de 2012”.

Y se tiene, en su lugar y además presente:

Octavo: Que, la demandada dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva en alzada, solicitando que se revoque y se rechace la demanda en todas sus partes o, en subsidio se reduzca el monto condenado pagar -únicamente por concepto de gastos comunes, sin costas por no haber sido totalmente vencida, con costas.

Noveno: Que, los argumentos vertidos en el libelo de apelación en nada alteran lo resuelto en la sentencia impugnada, por lo que ésta será confirmada, sin perjuicio de lo razonado en los fundamentos que anteceden respecto a la excepción de prescripción opuesta en esta Corte.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes y artículo 310, todos del Código de Procedimiento Civil; y artículos 2492, 2503, 2514 y siguientes del Código Civil, se resuelve que:

I.- **Se acoge** la excepción de prescripción deducida en segunda instancia y en consecuencia, se declara prescrita la deuda de gastos comunes desde el mes de mayo de 2009 al 3 de agosto de 2012.-

II.- **Se confirma** la sentencia apelada de 31 de diciembre de 2019 dictada en los autos C 9776-2017 del 8° Juzgado Civil de Santiago, **con declaración** que se acoge la demanda deducida y se condena a doña Paloma Larrondo Segeur a pagar por deuda de gastos comunes la suma que se determinará mediante la respectiva liquidación del crédito que se efectuará en la etapa de cumplimiento del fallo entre el 3 de agosto de 2012 al mes de marzo de 2017, más multa de 3 UF por cada mes de atraso en el pago de gastos comunes,



más intereses corrientes para operaciones reajustables a contar de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada.

III.- No se condena en costas a la demandada por no resultar totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redactado por la ministra María Paula Merino Verdugo, quien no firma por ausencia.

Rol IC N° 1217-2020 Civil.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M. y Ministra Suplente Isabel Margarita Zuñiga A. Santiago, dos de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dos de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

